

La Universidad Autónoma de Sinaloa: los desafíos sociales de la calidad académica y el empleo universitario

Arturo Santamaría Gómez*

Introducción

LOS ESTUDIOSOS del sistema de educación pública en México ya tenían, en la década de los setenta del siglo recién finalizado, el pleno convencimiento de que ésta se encontraba en crisis. En los ochenta, especialistas como Didriksson, señalaban: “La crisis de la educación en México no es concebible sin su relación con la crisis económica, con la social, con la del Estado y sin seguirle la pista con frecuencia a los derroteros y alteraciones de la política educativa; sobre todo cuando, como es el caso, la política seguida es tan errática.”¹ La calidad de la educación desde los niveles básicos a los superiores exhibía ya un severo deterioro, pero las autoridades de los centros escolares no siempre estuvieron dispuestas a aceptarlo.

Como consecuencia de la crisis política de 1968, Luis Echeverría relevó presidencial de Gustavo Díaz Ordaz, impulsó, en un intento de responder a esa nascente crisis, un proyecto de modernización de la educación universitaria; no obstante, tales planes ocuparon un plano secundario ante la necesidad política de diezmar la actitud crítica de las universidades públicas al régimen político y al sistema económico. La decisión del nuevo gobierno fue la de incrementar sustancialmente los subsidios federales a la educación superior para recuperar la confianza de los universitarios extraviada en 1968. Al respecto, escribió Pablo Latapí: “Las universidades públicas llegaron a disponer de casi siete veces más recursos entre 1970 y 1975, en tanto que su inscripción se incrementó solamente en 122 por ciento.”²

En el sexenio de José López Portillo no disminuyeron los aumentos presupuestales a las universidades porque se sostuvo en la mayoría de los casos

*Sociólogo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el Área de Ciencias Sociales de la UAS.

¹Axel Didriksson, *Política educativa y movimiento universitario 1983/1988*, Universidad Autónoma de Zacatecas, Ediciones de Cultura Popular, 1989, p. 9.

²Pablo Latapí, *Análisis de un sexenio de educación en México*, Nueva Imagen, México, 1980, p. 183.

el objetivo de recuperarlas políticamente mediante la vía financiera, y en otros, como en Sinaloa, a través de la vía complementaria de una simulada tolerancia ideológica. Los ingresos petroleros y los préstamos internacionales fueron las fuentes financieras que permitieron la continuidad de la estrategia de los últimos gobiernos populistas del régimen. Con López Portillo, los subsidios a la educación superior pasaron de 6,500 millones de pesos en 1976 a poco menos de 20,000 millones en 1980. El número de estudiantes universitarios al final del sexenio echeverrista fue de 540,000 y en 1980, con López Portillo, era de 820,000.³

A pesar del considerable aumento de subsidios a la educación superior y el crecimiento de la matrícula, en la misma década se perfiló en las filas estudiantiles un severo cuestionamiento a la orientación ideológica que imperaba en las universidades del país. La crítica de organizaciones y movimientos estudiantiles de izquierda a la educación universitaria era radical: estaba al servicio de las clases dominantes del país y subordinada al capital internacional. En la mayoría de las universidades públicas, diferentes organismos estudiantiles, dirigidos frecuentemente por los partidos y agrupamientos del socialismo mexicano buscaron la subversión ideológica de la educación burguesa y la construcción de universidades alternativas de clara orientación marxista. Particularmente en las universidades autónomas de Puebla, Guerrero y Sinaloa, la izquierda mexicana tuvo el éxito político de acceder al nivel directivo. No obstante, en el ámbito académico no hubo una superación de la crisis, sino, al contrario, un deterioro todavía mayor.

El trato financiero a las universidades donde se habían levantado fuertes movimientos estudiantiles, académicos y sindicales que impugnaban con severidad el modelo educativo imperante, aun con la evidente inestabilidad académica y el radical activismo político que imperaba en ellas, no fue alterado en lo sustancial por parte de las autoridades federales, aunque sí por las estatales, tal y como sucedió en Sinaloa durante la administración de Antonio Toledo Corro.

Sin embargo, a mediados de la década siguiente, la mayor crisis de la educación universitaria y el nuevo modelo de desarrollo del país llevó a la nueva clase política en el poder a generar una propuesta educativa que chocaba tanto con el viejo modelo de la universidad pública y con el de las izquierdas mexicanas. Las nuevas orientaciones educativas que adoptaba el emergente cuerpo directivo del partido oficial y del Estado, empujaron a las autoridades

³Olac Fuentes Molinar, "Las épocas de la universidad mexicana", *Cuadernos Políticos*, núm. 36, Era, México, abril-junio de 1983, p. 52.

educativas de toda universidad pública a una revisión crítica de sus actividades fundamentales.

A mediados de los ochenta, el documento más conocido e influyente del diagnóstico que hacían de la universidad pública los nuevos dirigentes de la educación superior mexicana fue: “Fortaleza y debilidad de la Universidad Autónoma de México” que presentó el doctor Jorge Carpizo MacGregor, rector de la misma institución.

Salvador Martínez Della Rocca e Imanol Ordorika Sacristán, quienes encabezaron un movimiento universitario contra las tesis del doctor Jorge Carpizo, presentan esta síntesis crítica de ellas:

Según este texto polémico, durante el periodo en que la matrícula estudiantil se había masificado, la calidad de la educación universitaria había disminuido notablemente. Esto se había mostrado en un descenso significativo en la eficiencia terminal y en los índices de titulación. Los estudiantes que ingresaban a la UNAM en sus diferentes niveles eran de muy baja calidad. La actividad académica en la Universidad se había relajado notablemente durante este periodo; prueba de ello eran los altos índices de reprobación y el número de exámenes extraordinarios que se realizaban por año y por nivel. Los bajos precios de cuotas y servicios impedían que los estudiantes valoraran el alto costo de la educación universitaria. La obsolescencia de los planes de estudio y la orientación arbitraria de los proyectos de investigación habían alejado a la Universidad de los requerimientos del mercado de trabajo, desvinculando a la institución del aparato productivo nacional. Como resultado, la Universidad Nacional había perdido incidencia en diversos espacios de la sociedad mexicana y, sus egresados, opciones de empleo y presencia en los niveles directivos del país. El documento hacía una caracterización alarmante del personal académico universitario, profesores que no enseñan e investigadores de bajo rendimiento. En suma, la masificación de la enseñanza y el crecimiento de la Universidad habían producido un intenso deterioro académico, particularmente durante la década de los años ochenta.⁴

Palabras más palabras menos, numerosos documentos de la SEP, la ANUIES, y de autoridades e investigadores de las universidades públicas coincidían con el análisis del doctor Jorge Carpizo. Por otra parte, hubo por parte de investigadores independientes reflexiones que admitían la crisis de la educación pública, pero le daban otra explicación y alternativas distintas,

⁴Salvador Martínez Della Rocca e Imanol Ordorika Sacristán, *UNAM: Espejo del mejor México posible*, Era, 1993, p. 52.

tal y como lo hacen Martínez Della Rocca y Ordorika Sacristán. Los intensos debates que se dieron en torno a la UNAM en particular, y la educación pública universitaria en general, en 1986-1987 y más recientemente en 1999-2000, revelan las diferentes posiciones, de la academia, de las elites y del conjunto de los actores de la sociedad mexicana. No puede ser de otro modo porque la orientación de un proyecto de educación superior implica preguntarse qué proyecto de país se quiere alcanzar.

La universidad sinaloense en los setenta

En la Universidad Autónoma de Sinaloa la destrucción de la vida académica por parte del movimiento estudiantil, bautizado como “enfermo” por su radicalismo, y por la acción política de los partidos de la izquierda mexicana que allí actuaban, fue tan devastadora entre 1973 y 1977 que las mismas autoridades universitarias, aun siendo militantes de los partidos políticos que gobernaban la institución, señalaron la profunda crisis educativa interna y la necesidad de diseñar programas de reconstrucción alternativa. Es importante observar que si bien tanto en la UNAM (en 1986), como en la UAS se diagnosticaron desde la rectoría las debilidades, enfatizando el grave deterioro de la educación que se impartía, hay profundas diferencias en ambos procesos que dependen del momento histórico en que se presentan, de las motivaciones ideológicas y académicas, y de los actores sociales que participaron en ellos.

El documento de las autoridades de la UNAM no sólo se orientaba hacia el análisis de las insuficiencias e irregularidades de la vida académica, laboral y administrativa de la institución; también cuestionaba profundamente el paradigma educativo nacido con el régimen de la revolución de 1910. Por su parte, la llamada Universidad Democrática, Crítica y Popular (UDCP) que se proclamó en la UAS a partir de 1977, pretendía erigirse como una universidad anticapitalista a la cual había que dotar de una racionalidad política e ideológica de la cual se careció en los años sesenta y en el periodo de transición a la hegemonía del Partido Comunista Mexicano en la rectoría y el sindicato de la UAS.

La propuesta del doctor Jorge Carpizo, reeditada en parte por los sucesivos rectores, José Sarukhán y José Barnés a lo largo de los años noventa, no culminó en los cambios que pretendía lograr porque fue abortada por los movimientos estudiantiles. En cambio, la UDCP que propusieron un sector de las izquierdas mexicanas en Sinaloa, Puebla y Guerrero sí llegó a implantarse, en gran medida como resultado de las luchas estudiantiles de los sesenta y setenta.

La UAS fue la única universidad mexicana, incluyendo las de Guerrero y Puebla, donde la generación estudiantil gestada en los movimientos de los años sesenta y principios de los setenta alcanzó las máximas instancias de conducción y dirección. Jorge Medina Viedas, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa de 1981 a 1985, en su libro *La universidad amenazada*, habla de cómo esta generación, de la que él mismo formaba parte, inició la radical transformación de la primer institución de educación superior del estado:

En Sinaloa, la Universidad tuvo en 1966 su primer movimiento de la época moderna. El movimiento contra el rector Julio Ibarra Urrea, delató que la Universidad como institución requería de cambios en sus métodos de conducción y en sus estructuras de gobierno. El autoritarismo, la antidemocracia, el elitismo y en general las orientaciones educativas conservadoras eran fielmente representadas en 1966 por Julio Ibarra, contra todo lo cual lucharon los estudiantes de la universidad, logrando la renuncia del rector. De 1966 a 1972, el movimiento universitario de Sinaloa –principalmente regido por los estudiantes– hizo de la lucha por la democratización su razón de ser. En 1970, se declaró contra la imposición del rector Gonzalo Armienta y por una nueva Ley Orgánica democrática. Durante 1971 y 1972, continúa la lucha –heroica y decidida– contra la descomposición de la política rectoral y contra la supresión de la vida democrática interna.⁵

En su dimensión política, el movimiento estudiantil sinaloense, aun antes de 1968, se convirtió en el protagonista número uno en la lucha por la democratización de los espacios civiles de la entidad. Al igual que el movimiento universitario de la ciudad de México de 1968, los estudiantes de Sinaloa enfrentaban la rigidez y el verticalismo del sistema político del país, pero no se proponían de manera explícita y planificada construir un modelo de alternativo de universidad. En el pliego petitorio del Consejo Nacional de Huelga de 1968 no se incluían demandas académicas sino cívico-democráticas. En Sinaloa, la movilización por una nueva Ley Orgánica y la destitución del rector Gonzalo Armienta implicaba una lucha hacia dentro de la universidad pero sin que hubiera un programa académico que sustituyera al entonces vigente.

El movimiento estudiantil de 1968 en el plano histórico inmediato fue derrotado, pero las luchas estudiantiles sinaloenses no sufrieron esta situación; al contrario, se fortalecieron de 1966 a 1972. Sin embargo, debe señalarse que el control de las instancias de gobierno de la institución por parte de

⁵Jorge Medina Viedas, *La universidad amenazada*, Universidad Autónoma de Sinaloa, 1982, p. 8.

estudiantes y de un reducido número de profesores, no fue acompañado de planes y estrategias académicas definidas. Una de las razones que explican esta situación es que a diferencia de 1968 en la ciudad de México, donde la influencia del Partido Comunista en el movimiento era secundaria, en Sinaloa la influencia de los comunistas fue determinante en la orientación de las luchas universitarias, pero como ya se indicó antes, el derrocamiento de los rectores Julio Ibarra y Armienta Calderón no propició que se instrumentara un modelo universitario sustituto.

El conjunto de las agrupaciones de izquierda que intervinieron en las luchas universitarias sinaloenses de la segunda mitad de los sesenta y a lo largo de lo setenta, impulsó una política tan radical y dogmática que expulsaron o motivaron la salida por *motu proprio* de un amplio número, sino es que la mayoría, de los profesores con más experiencia y antigüedad de la universidad debido a que no compartían la ideología anticapitalista y las acciones del movimiento estudiantil. La eliminación de ese capital intelectual vació a la UAS de los conocimientos necesarios para mantener una mínima racionalidad académica y un elemental orden escolar. El movimiento estudiantil brutalmente interrumpió la reproducción del cuerpo magisterial tradicional pero no pudo crear otro que en lo inmediato lo reemplazara. Sobre todo entre 1973 y 1976 fueron años de estampida y destrucción. Esos años fueron “el medioevo de la UAS... La noche más negra y prolongada de la Universidad... De 1973 a 1976 fueron los años de la destrucción y de la antiacademia...”, cita Rodrigo López Zavala⁶ a actores de esos momentos.

Baldemar Rubio Ruelas, Audómar Ahumada y Jaime Palacios Barreda, fueron figuras destacadas del movimiento estudiantil sinaloense de los sesenta y del cuerpo dirigente universitario en las dos décadas subsiguientes. Ellos reconocen la enorme pérdida y caos que tuvo la universidad en esos años, pero descargan el peso de la responsabilidad de ese desorden destructivo en el movimiento “enfermo”, cuando una sensata distancia histórica de tres décadas revela que, en realidad, fue el conjunto del movimiento, incluyendo a las izquierdas más moderadas, quienes crearon en la UAS una atmósfera irrespirable para los viejos profesores. En realidad hubo corresponsabilidad de todos los actores sociales y políticos, porque ninguno propuso que no se eliminara a la vieja guardia académica que no predicaba la misma ideología revolucionaria del movimiento. Del mismo modo no pudieron idear un sólido modelo de universidad alternativa porque se apropiaron, sin estar capacitados para ello, de los puestos de mando de la universidad y de los nombramientos de profesores e investigadores.

⁶Rodrigo López Zavala, *Utopía y universidad*, 1995, Universidad Autónoma de Sinaloa, p. 54.

El movimiento estudiantil, en su afán de convertir a la universidad en un instrumento de lucha revolucionaria, no tuvo la experiencia o la capacidad intelectual o el interés de proponer un nuevo paradigma académico. En ese escenario, los diferentes grupos que lo constituían se disputaron la conducción política y el manejo financiero de la institución sobre un vacío académico y una sobredosis ideológica.

Entre 1973 y 1976, la corriente “enferma” del movimiento empujó a la Universidad a un caos que no parecía tener fin y que condujo a la UAS a la más absoluta oscuridad académica y a un entorno de fuerte agitación política; escandalizando incluso a otros sectores de izquierda más moderados como los comunistas o los integrantes de la agrupación política “José María Morelos”.

A pesar de las marcadas diferencias políticas e ideológicas de los diferentes grupos de izquierda que actuaban en la universidad, las generaciones universitarias que les daban cuerpo asumieron el mando de la institución de 1972 en adelante. De ese año hasta 2001 y por lo menos hasta 2005, integrantes de esas generaciones han sido los titulares de la rectoría y de los principales cargos de la administración central de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

De 1977 a 2000 la UAS ha avanzado muy lentamente en la recuperación de la vida académica de la institución. Acerca del inicio de ese proceso restauratorio, el ex rector Medina Viedas escribió en 1982:

Después del naufragio de los grupos verdaderamente radicales, una vez que las distintas fuerzas democráticas de la universidad asumieron el compromiso de hacerla avanzar, surgió un intento de proyecto educacional que se proponía buscar el reordenamiento de la vida institucional y la implementación de un proyecto de superación académica.⁷

La corta distancia que había entre 1972-1976 y 1982, y la identificación que tenía Jorge Medina Viedas con el modelo de la UDCP le impidieron ver las enormes limitaciones que tenían ese reordenamiento y el proyecto de superación académica. Con la ventaja de una perspectiva de 13 años más y un aparato conceptual distanciado de la ideología en boga en los años setenta, Rodrigo López Zavala hizo en 1995 una lectura diferente de esos cambios:

La Universidad Democrática, Crítica y Popular es una propuesta producto del pensamiento utópico de la izquierda. No se trata de una ficción sino de un imaginario colectivo que pretendió recuperar la regularidad académica semiparalizada por la devastación que había provocado el ultraizquierdismo durante 1973-1975 y el alto grado de violencia con el que se enfrentaban

⁷Jorge Medina Viedas, *op. cit.*, p. 10.

los grupos políticos en la disputa por la rectoría de la universidad en 1976 y principios de 1977.⁸

Sin embargo, como lo señala López Zavala y prácticamente cualquier universitario que hubiese sido partícipe de esos años, la UDCP seguía siendo parte de una estrategia del PCM y después del PSUM para la toma del poder y no era en realidad una propuesta de renovación académica alternativa. De la misma manera, las otras organizaciones políticas de izquierda que actuaban al interior de la UAS tampoco ofrecían ningún paradigma académico renovador.

Crítica a la UDCP y permanencia de los mismos actores sociales

La Universidad Democrática Crítica y Popular fue en el terreno académico una propuesta muy débil e ideológicamente excluyente desde su insemnación. Recapturó un mínimo orden para que la vida escolar y administrativa fuera menos caótica que a principios de los setenta, pero nunca estableció una plena normalidad de las actividades universitarias. El enfrentamiento con el sistema político y las disputas internas contribuían sustancialmente para que no hubiera una recuperación firme, sin embargo, el factor que más incidió en esa limitada rehabilitación de la vida académica fue de carácter estructural y no político. Sin subestimar la importancia de las presiones del gobierno de Antonio Toledo Corro y el dogmatismo ideológico de los diferentes grupos que actuaban en la UAS, lo cierto es que la mayor parte del cuerpo de funcionarios, profesores y trabajadores administrativos y de intendencia habían ingresado por su pertenencia o compromiso con los partidos y agrupamientos políticos. De esta manera se incorporaron a la universidad muchos hombres y mujeres sin ninguna vocación magisterial y poca o nula capacitación para la cátedra o la investigación. Asimismo, se sumó personal administrativo con limitada o inexistente calificación laboral para el cual había sido contratado.

El tiempo fue dotando de alguna experiencia a estos cuerpos sociales. Cursos de capacitación y actualización, así como estudios de posgrado, fortalecieron la condición universitaria de ciertas capas, pero las prácticas sociales y culturales de las mayorías siguieron siendo esencialmente las mismas, a pesar de las permutas de su ideología política y el empleo secundario de los manuales de marxismo soviético. Los grupos que transformaron a la universidad entre 1966 y 1972, transmitieron a las generaciones posteriores sus

⁸Rodrigo López Zavala, *op. cit.*, p. 32.

estilos, hábitos, tradiciones y prácticas culturales, políticas y sociales que se han reproducido en la cotidianidad de la institución.

Los docentes que poseían una formación académica bien cimentada fueron ubicados en posiciones de poca influencia; situación que provocó que se encerraran en sus laboratorios, cubículos y aulas, por los que su radio de influencia fue de corto alcance.

Con el arribo de Jorge Medina Viedas a la rectoría de la UAS en 1981 se buscó que la UDCP superara su orientación activista y se perfilara hacia un mayor compromiso académico. El proyecto reformista incorporó una racionalidad administrativa en los asuntos universitarios y disminuyó el tono del enfrentamiento con el gobernador del estado; no obstante, la sobrevivencia de grupos políticos que se situaban a la izquierda del PCM-PSUM y sobre todo la reproducción de hábitos sociales y culturales poco favorables a la academia dificultaron el fortalecimiento del cambio. A esta propuesta, los integrantes del equipo de Medina Viedas le llamaron la “superación crítica de la UDCP” mediante la cual

se reivindicaba el compromiso social de la Universidad, particularmente con los sectores económica y políticamente desprotegidos; empero, poniendo el acento en la formación del nuevo profesional. Se rescataba el valor ético y el papel político de la Universidad, en sus funciones académicas, pero dejaba de lado el espíritu vanguardista que estructuró el discurso de la UDCP en sus orígenes.⁹

La UAS como campo de ensayo electoral de la izquierda

Con el proyecto de Ley Orgánica presentado por la Comisión Legislativa del Consejo Estudiantil de la Federación de Estudiantes Universitarios de Sinaloa, en febrero de 1972, se sentaron las bases para que las autoridades de la institución fueran electas mediante el voto de los estudiantes, académicos y empleados. El artículo 4o. lo permitía mediante la siguiente cláusula: “Organizarse democráticamente como lo estime más conveniente dentro de los lineamientos generales establecidos por la presente Ley.”¹⁰

La Ley Orgánica fue aprobada en el Congreso del Estado el 10 de abril de 1973 y el movimiento estudiantil la aceptaba aunque críticamente. Liberato Terán, protagonista central de las luchas estudiantiles que promovieron estos cambios escribió en abril de 1973:

⁹*Ibidem*, p. 160.

¹⁰Citada por Liberato Terán, en *Sinaloa, Estudiantes en lucha*, Universidad Autónoma de Sinaloa, 1982, p. 188.

Conquistada, está allí una Ley Orgánica que satisface las demandas de paridad en los consejos y desaparición de la junta de gobierno.

Vista desde una nueva perspectiva, esa Ley es limitada y merecedora de una aceptación totalmente crítica.

Se abre así la posibilidad de transformación democrática de la universidad para ponerla al servicio de la causa del pueblo.¹¹

Sin embargo, no fue en 1973 cuando el conjunto de los estudiantes, académicos y empleados eligieron por primera vez al rector, sino cuatro años después. Tal y como lo concebían Liberato Terán y, por lo visto, la mayoría de los activistas estudiantiles, con base en esa ley había que profundizar la lucha democrática al interior de la Universidad como un medio para el objetivo final que era el socialismo, porque “no (debía) perderse el objetivo de que lo importante (...) es la lucha revolucionaria (para) la edificación de un México socialista”, aunque añadía, “claro que esto no es problema de la Universidad”.¹²

Esta perspectiva ideológica no era exclusiva de los estudiantes sinaloenses, sino que, en la década de los setenta, era una de las tesis centrales de los movimientos estudiantiles de izquierda en prácticamente todo el mundo. Por lo menos en México, las luchas juveniles en varias universidades públicas tenían como objetivo implantar el marxismo como la ciencia y/o filosofía oficial en los planes de estudio y lograr la elección de las autoridades a través del voto universal de los integrantes de la comunidad.

La exigencia del voto universal cobró singular relevancia por cuanto que se demandaba en un contexto nacional dominado por un sistema político autoritario y electoralmente fraudulento. Los recintos universitarios se presentaban como una real posibilidad de exponer libremente las ideas revolucionarias, ejercer libremente el voto y sobre todo elegir autoridades que contribuyeran al fortalecimiento de la causa socialista. Para el Partido Comunista y otras agrupaciones de izquierda, era una oportunidad política de importancia estratégica porque el régimen les negaba la legalidad y, por lo tanto, la participación electoral en las lides municipales, estatales y federales. El PCM, principal promotor y beneficiado de los procesos colectivos para elegir autoridades universitarias encontró un nicho donde acumular un poder político que no tenía en ninguna otra parte. De igual manera, los grupos de izquierda más radicales que negaban el valor de la participación electoral en la lucha por el socialismo, en el seno de las universidades lo

¹¹ Liberato Terán, *op. cit.*, pp. 124-125.

¹² *Ibidem*, p. 125.

hacían en abierta contradicción con sus tesis programáticas. La explicación residía en que había la posibilidad real de ganar la rectoría o las direcciones de facultades y escuelas que sirvieran para poseer más influencia política y acceder a recursos financieros e infraestructura de la institución.

Las izquierdas en su conjunto encontraron en las universidades un santuario para reclutar militantes, adoctrinar a miles de individuos, obtener recursos económicos, tener protección de las masas y experimentar su capacidad de gobierno. El objetivo de todas las corrientes de izquierda era esencialmente político. Lo académico aparecía en un plano secundario.

Es evidente que las metas del movimiento estudiantil sinaloense y posteriormente del conjunto del movimiento universitario, que incluía también a los académicos, autoridades y empleados administrativos y de intendencia, eran ideológicas y políticas y, por lo mismo, sus medios de lucha eran los mismos. La lucha electoral era parte del entrenamiento político por la democracia y el socialismo en la sociedad mexicana, y no para edificar un modelo académico alternativo.

En 1973, aun sin que el rector saliera de sus filas partidarias, la izquierda sinaloense tomó el poder político (así asumido por sus actores) de la universidad, sin la más mínima propuesta académica. Tanto la intensidad de la lucha política que sostuvieron desde 1966 contra los rectores y los gobiernos estatales y federales, como su falta de preparación académica, impidieron que las izquierdas tuvieran una propuesta de universidad alternativa sustentada en la racionalidad académica. De 1973 a 1977, el movimiento estudiantil, en primer plano, y los profesores, en un segundo plano, desde fuera de la rectoría ejercían el dominio político sobre la universidad. Sería hasta 1977, con la propuesta de la UDCP, cuando se instauró el marxismo como la ciencia social única y como ideología dominante en la institución, pero sin generar en el terreno pedagógico y científico absolutamente nada nuevo. Al carecer de formación profesional y tradición académica los jóvenes e improvisados profesores, salidos del movimiento estudiantil y de las escuelas primarias y secundarias, echaron mano de las peores prácticas escolares: el dictado y la memorización mecánica. Aunado a ello, la atmósfera escolar empeoró notablemente porque la disciplina se relajó de manera dramática como resultado del febril activismo político, el menosprecio al estudio sistemático, la carencia de tradiciones académicas, la irreverencia a la autoridad y el convencimiento de que la pertenencia a las organizaciones de izquierda les garantizaba un empleo en la misma universidad.

El voto universal y las campañas electorales fueron un método para establecer la competencia política y politizar a los profesores, alumnos y empleados, pero no un instrumento para renovar y revitalizar académica-

mente a la universidad. La democracia política al interior de la universidad no tenía nada que ver con nuevas teorías pedagógicas o nuevos contenidos de la enseñanza.

De la Universidad Democrática, Crítica y Popular de los setenta en los últimos años del siglo xx sólo quedaban influencias menores del marxismo en los ámbitos académico e ideológico. Prácticamente por inercia, algunos maestros veteranos o discípulos de éstos impartían clases de historia, filosofía, economía o sociología con una perspectiva marxista entre diluida y anquilosada. En realidad sólo un reducido grupo de profesores e investigadores tenían una sólida formación marxista que enriquecieran los aportes de académicos contemporáneos.

En el terreno político, en los noventa sí logró darse la separación entre los intereses y las actividades del PRD y la UAS, a pesar de que este partido heredó a un amplio número de activistas del PCM-PSUM y en general de la vieja izquierda que poseía el control de la universidad. La crisis ideológica del socialismo mundial de fines de siglo xx, acelerado por la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, aunado a la descomposición propia de las izquierdas al interior de la universidad contribuyeron decididamente para que los grupos dirigentes de la institución se alejaran de los partidos de izquierda, terminaran de sepultar a la universidad militante y se acercaran a la visión política e ideológica de la nueva clase política en el poder en México.

A pesar de lo anterior, la UDCP heredó prácticas culturales y mecanismos políticos que siguen existiendo en la Universidad Autónoma de Sinaloa:

1. los procedimientos político-partidarios para elegir autoridades;
2. las prácticas clientelares en la conducción de los asuntos universitarios;
3. una abigarrada y confusa gama de prácticas culturales, como el ausentismo franco o la irregularidad en la asistencia a clases tanto de profesores como de alumnos;
4. el incumplimiento de programas y objetivos; y
5. el papel secundario de la investigación científica, entre otros.

Aun con las reformas a los mecanismos de elección de autoridades que impulsó el rector Rubén Rocha Moya, en 1993, los criterios siguen siendo esencialmente políticos y los usufructuarios del poder universitario siguen siendo los integrantes de la vieja clase política que propuso la universidad militante en los setenta, que la olvidó en los ochenta y que ahora intentan impulsar las directrices de los gobiernos neoliberales.

El mecanismo de elección de autoridades creado como parte de la UDCP ha sido preservado por los grupos dirigentes de la universidad por cuanto

les garantiza su reproducción en el poder, ya que estos grupos constituyen en lo fundamental a una clase política que transita entre los mandos del sindicato y el cuerpo administrativo de la institución. La instauración de criterios preponderantemente académicos para elegir rector y otras autoridades implicaría su eliminación como grupos hegemónicos en la universidad.

Lo paradójico en los últimos 30 años de historia de la UAS es que la inestabilidad académica de los setenta y principios de los ochenta, que en gran parte provenía de las demandas revolucionarias estudiantiles, de las exigencias y movilizaciones sindicales y de la lucha contra el Estado, ahora, después del abandono del activismo militante de izquierda, se ha reducido a la disputa por el poder de la clase política distribuida entre la burocracia administrativa de la rectoría, la burocracia del sindicato y las burocracias de las escuelas afiliadas a diferentes grupos de interés que actúan al seno de la UAS.

En la medida de que la clase dirigente tradicional ve a la Universidad como un coto de poder y a la política como su principal medio para actuar dentro de ella, recurre a la movilización y al activismo internos para enfrentar a los grupos que difieren de sus intereses, como antes lo hacían el movimiento estudiantil y el sindicato contra el Estado.

Este mismo activismo político, que ahora sólo es de consumo endógeno, es el que ha impedido que los planes de modernización neoliberal propuestos por la SEP y aceptados formalmente por los grupos en el poder de la Universidad tengan éxito. No es la oposición ideológica y política a esos planes, como fue en el pasado, lo que ha detenido una mayor consolidación de la modernización eficientista, sino la inestabilidad que provocan los choques de los grupos de interés.

El movimiento universitario de izquierda implantó en los setenta la lucha político electoral para escoger autoridades. Debido a la diversidad de organizaciones que había en el seno de la institución se estableció un sistema altamente competitivo que contrastaba con el que existía en el conjunto del país.

La autoridad de tipo tradicional o caciquil se impuso en la universidad de manera semejante a lo que sucedía en el sistema político priísta.

El rector, al igual que el Presidente en el sistema político derrotado el 2 de julio de 2000, maneja el presupuesto de la institución de manera discrecional sin que ninguna otra instancia de decisión, en este caso el Consejo Universitario, impida recomendar cómo se distribuyen los recursos financieros en la universidad. También de manera equiparable al presidente priísta, el rector de la UAS es el fiel de la balanza que determina las cuotas de poder entre los diferentes grupos que conforman la alianza electoral o pacto político.

En la UAS, el rector no entrega el poder a su sucesor de manera monárquica, como en el sistema priísta, porque el sistema electoral es altamente competitivo; pero sí es nuevamente el fiel de la balanza para seleccionar al candidato de la alianza política que él encabeza. Asimismo, el rector decide al candidato de su fórmula con el objetivo de ser el poder detrás del trono si es que su escogido llega a la rectoría, en una práctica política similar a como lo hacía Plutarco Elías Calles durante el *maximato*. Pero, a diferencia del régimen del jefe máximo, no ha habido ni un solo rector de la UAS que en realidad haya podido serlo.

La UDCP fue un proyecto de universidad militante de corta existencia aunque sus secuelas políticas y herencias perduran en muchos sentidos: las dos principales son:

1. la perdurabilidad de su sistema político de elección de autoridades y;
2. que los individuos que conforman sus estructuras de dominio actual son los mismos que encabezaron el movimiento estudiantil triunfante, formaron los sindicatos y constituyeron las primeras autoridades rebeldes.

La clase dirigente de la UAS ha gobernado sin ruptura generacional a lo largo de casi tres décadas. Por lo mismo, defiende los mecanismos clásicos de poder y en una reacción instintiva de defensa se opone a la elevación de los criterios académicos como normas para elegir autoridades en la que debería ser una nueva etapa de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Lenta recuperación académica, pero sin renovación

De 1977 en adelante va apareciendo lenta y accidentalmente un discurso académico muy ligado a la tecnología educativa de corte positivista. A partir de la rectoría de Jorge Medina Viedas, la Secretaría de Educación Pública va estableciendo de manera paulatina las transformaciones académicas impuestas por los nuevos gobiernos antipopulistas y de claro perfil tecnocrático.

A partir de los ochenta –dicen los autores de la obra *La universidad pública. ¿Tiene rumbo su desarrollo en México?*– una estrategia de planeación universitaria dio pauta a la superación del modelo de la universidad crítica y popular (...). La nueva universidad reapareció como iniciativa institucional, como discurso administrativo; mediada por un conjunto heterogéneo de universitarios provenientes del movimiento estudiantil de reforma. El discurso de la *nueva universidad*, además, no se propuso conciliar con la *universidad crítica*

y *popular*, pretendía más bien restablecer su identificación con el discurso de reforma universitaria democrática.¹³

Bajo el régimen político tradicional las universidades públicas mexicanas eran regidas casi sin excepción por militantes del partido oficial, a pesar de que en su mayoría habían obtenido el estatus jurídico autónomo entre 1929 y la década de los setenta. Esta condición era prácticamente otra de las reglas no escritas del viejo régimen. Aun y cuando las leyes orgánicas de las universidades autónomas establecen que serán exclusivamente sus instancias de gobierno las que decidan quiénes serán sus autoridades, en realidad, empezando por la UNAM, el poder ejecutivo federal o estatal las imponía o, por lo menos, tuvo una incumbencia inocultable en su nombramiento, como es el caso más reciente de Juan Ramón de la Fuente, en la Universidad Nacional.

Precisamente una de las características de los sistemas políticos autoritarios como el mexicano era agregar a sus esferas de control el dominio político la rectoría. Las universidades públicas en la mayoría de los casos han sido trampolines políticos, cotos de poder, banca de calentamiento o celda de castigo de políticos.

Cuando alguna entidad de la república tuvo la suerte de tener un gobernador culto o interesado en la educación, el rector o rectores pudieron tener un perfil académico y una gestión afortunada, pero sin nunca de ser fieles soldados del ejecutivo estatal.

Las universidades públicas con frecuencia han sido actores centrales en las luchas políticas de la capital nacional y de los estados de la federación. En varias de ellas, aunque hay que aclarar que no en la mayoría, los movimientos estudiantiles en primer lugar, y en segundo, los sindicales, confrontaron al régimen político. Los casos más conocidos a nivel de la república han sido los movimientos estudiantiles de 1968, encabezados por jóvenes de la UNAM y el IPN, y el de 1999-2000, liderado por el CGH de la misma UNAM. En el terreno del sindicalismo universitario, los maestros de la UNAM confrontaron en los setenta la política laboral de José López Portillo, y en 1977 paralizaron con una huelga a la principal casa de estudios del país. Desde mediados de lo setenta a finales de los ochenta el sindicalismo de la UAS también sostuvo fuertes enfrentamientos con las políticas gubernamentales.

En los estados de Puebla, Guerrero y Sinaloa, los movimientos estudiantiles primero y posteriormente los sindicales (a veces en coordinación y/o alianza, con autoridades universitarias y sindicatos) confrontaron, con frecuen-

¹³ Ricardo Arechavala y Pedro Solís (s/f), *La universidad pública. ¿Tiene rumbo su desarrollo en México?*, Universidad de Guadalajara-Universidad Autónoma de Aguascalientes, p. 130.

cia de manera radical, a los gobiernos estatales. En parte por el conservadurismo y autoritarismo de gobernadores como O´Farril, en Puebla, Rubén Figueroa, en Guerrero, y Antonio Toledo Corro, en Sinaloa, pero también por los excesos ideológicos y políticos de los universitarios, los titulares del ejecutivo estatal los castigaron severamente. El control que había obtenido la izquierda mexicana sobre estas tres universidades inevitablemente las confrontaba contra un sistema político autoritario.

Sin que dejara de haber marcadas contradicciones políticas, así como confrontación de intereses personales y de grupo, el conjunto de la izquierda tanto en la UAS como en la Universidad de Guerrero y en la de Puebla, tenía como principal adversario al régimen, y dejaba en un segundo plano sus diferencias internas.

En estas tres universidades, la sobreideologización de la izquierda le impidió desarrollar un proyecto académico alternativo a los que impulsaban los hombres del sistema, pero su fuerza y definición políticas le permitieron elegir a sus autoridades mediante intensas disputas de los diferentes partidos y grupos políticos contestatarios que actuaban en su seno. La debilidad académica fue patética pero la fortaleza política interna fue muy grande, al menos por una década. Es decir, tanto en las universidades gobernadas por la izquierda como las gobernadas por el PRI, sus instancias universitarias de gobierno y decisión no elegían a individuos independientes en el plano partidario ni, por lo general, con una experimentada y profunda vocación académica. La Universidad Autónoma de Sinaloa no ha podido superar los criterios y mecanismos político partidarios para elegir a sus autoridades, pero aun es más grave que en el proceso sucesorio de 2001 haya síntomas de que reaparece la injerencia del gobernador. Si de por sí ha sido perjudicial que los diferentes grupos políticos se disputen el control de la universidad, es todavía más dañino que intervenga el ejecutivo estatal porque hace intervenir intereses políticos todavía más poderosos y extrauniversitarios.

No deja de ser paradójico que haya personajes que se disputan la rectoría de la UAS, los cuales sin excepción militaron en organizaciones de izquierda, y ahora presuman como una de sus mejores cartas de presentación la amistad o cercanía con el gobernador, que milita en el PRI, al cual anteriormente criticaron con fiereza.

Si esto es cierto, quiere decir que la clase política de la UAS, además de no entender la imperiosa necesidad de los cambios académicos que se exigen en esta época, tampoco ha entendido, o no le importa, la ruptura que está marcando con el pasado la parte más activa de la sociedad mexicana. Ésta plantea una clara redefinición de las relaciones entre gobernantes y gobernados, entre sociedad civil y Estado, entre el interés público y el interés privado,

dentro de la cual todos los espacios e instancias del interés público, como las universidades públicas, deben actuar de manera transparente, honesta y apegadas a su función específica. Institución, grupo social o grupo político que no entienda las nuevas reglas del juego que se están estableciendo en México se verán severamente castigadas por las nuevas tendencias societarias.

La clase política de la UAS no parece percibir que hay un malestar creciente entre sectores de académicos y estudiantes que cuestionan el dispendio de recursos en actividades políticas, la poca importancia que le conceden a las actividades académicas los precandidatos que la quieren dirigir, la escasa atención que exhiben frente a los castigos financieros y académicos impuestos por la SEP y el Conacyt, y la desestabilización que provoca en la universidad su disputa política.

Para nuestro infortunio, no hay una fuerza académica interna que pueda detener la disputa de la clase política y reorientar las actividades sustantivas de la universidad. En cambio, parece inminente una mayor presión de quienes serán las nuevas autoridades educativas y científicas del país, los cuales tienen una filosofía que choca con la baja eficiencia, la improductividad, la poca planificación prospectiva y la desorganización.

Los universitarios, el mercado de trabajo y el nuevo escenario

Los doctores Reyes Tamez Guerra y Rafael Rangel Sostmann, quienes han sido puestos a la cabeza de la educación mexicana bajo el gobierno de Vicente Fox, por sus antecedentes y primeras declaraciones esbozan un panorama de cambios drásticos y muchas exigencias a la universidad pública. Por principios de cuentas es muy conocida su filosofía de que la educación y la investigación deben corresponder en primer lugar a las necesidades del mercado, lo cual de diferentes maneras no cumplen ni las instituciones públicas ni las privadas.

Las características que ha ido asumiendo el mercado laboral mexicano a partir de 1982 han limitado, tanto por razones ideológicas como de estricta índole económica, las oportunidades de empleo de los egresados de las universidades públicas y privadas. Según un informe de la Confederación Patronal de la República Mexicana, en 1999 el 50 por ciento de 1'200,000 profesionistas que egresan cada año de las universidades no encuentra empleo en su campo de especialización. Lo cual, explica este mismo documento, se debe a que en parte la economía no crece lo suficientemente rápido para absorber esa masa de nuevos profesionistas. Así mismo, según las cifras de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, entre 1986 y 1999 el

empleo de los profesionistas de la UNAM en puestos de dirección de las empresas (como propietarios o ejecutivos) disminuyó en más del 42 por ciento. En el mismo periodo, la cantidad de egresados de la UNAM que ocupó puestos de rango intermedio disminuyó 57 por ciento.¹⁴ En este contexto, los egresados de la UNAM como los otros profesionistas de universidades públicas sufren una doble desventaja: un mercado laboral restringido y el menosprecio ideológico y profesional de los empresarios que prefieren a los universitarios de las instituciones privadas. En Sinaloa, según información del INEGI, en 1996, el 25 por ciento de la población desempleada poseía estudios superiores o bachillerato, mientras que en 1997 el porcentaje había aumentado al 47 por ciento.

El razonamiento que antepone las exigencias del mercado a las demandas sociales amplias y a las necesidades individuales de los profesionistas propone, como consecuencia lógica, restringir la matrícula universitaria, eliminar licenciaturas no demandadas por los empresarios y dar a los nuevos planes de estudio un contenido técnico e ideológico que satisfaga a los empresarios y a los nuevos dirigentes de la administración pública.

En Sinaloa, como en el resto de la república, este proceso ya se inició desde la década de los ochenta. Por ejemplo, la Comisión Estatal de Planeación de la Educación (Coepes) propuso en 1999¹⁵ revertir la densa concentración del estudiantado en las áreas administrativas, sociales y de agronomía para privilegiar las carreras de computación, acuacultura, comercialización de productos agropecuarios, informática y agronegocios, carreras creadas en estudios de factibilidad. Esta misma comisión propone que se legisle para que sólo se financie a las universidades y tecnológicos que respondan a las características del mercado estatal.

Para la Coepes, las universidades públicas y los sectores empresariales han seguido rutas distintas. Los sectores productivos no necesitan tantos profesionistas de las áreas tradicionales y las universidades no se han orientado a crear las nuevas carreras que los empresarios dicen necesitar. Sin embargo, para organismos como la Coepes, atrapados por los criterios neoliberales que sólo toman en cuenta las necesidades de la iniciativa privada y las características de los nuevos gobiernos, las abrumadoras necesidades sociales como son la educación, salud, alimentación, recreación, deporte y cultura, preservación ecológica, vivienda popular, seguridad pública, investigación científica, etcétera, merecen una atención menor de las universidades.

¹⁴ Información publicada en el diario *La Jornada*, México, D.F., 9 de noviembre de 1999, p. 27.

¹⁵ Yádira Carrera, "Obrero o desempleado", diario *Noroeste*, Culiacán, Sinaloa, 16 de agosto de 1999, p. 8b.

Ante estas propuestas, y seguramente por una conclusión propia, la Universidad Autónoma de Sinaloa empezó a planificar su matrícula en 1996. Decía el exrector Jorge Luis Guevara Reynaga (1997-2001):

ya no se permitió que cada escuela inscribiera el número de grupos y alumnos que quisiera, pues se planeó el nuevo ingreso. Por eso es que la Escuela de Contabilidad y Administración, Derecho y otras escuelas grandes no siguieron creciendo (...). Se reorientó la matrícula hacia escuelas menos pobladas, como Agronomía, Ciencias de la Tierra, Biología, Físico, Matemáticas, Filosofía y Letras. En contrapartida, la matrícula en bachillerato llegó a su capacidad instalada, no llegó a más, y eso que venía creciendo en 3,000 estudiantes al año, y en este (1999) sólo fueron 1,500, mientras las profesionales crecieron en 3,000.¹⁶

La decisión de reorientar la matrícula aparece como una decisión de racionalidad administrativa y académica endógena, pero no como respuesta a los estudios de factibilidad que propone la Coepes o a una política académica que responda a necesidades sociales. Por otra parte, la determinación de limitar el crecimiento del bachillerato, aunque seguramente exigida por la SEP, se ofrece como una decisión acertada dentro de la UAS, por cuanto el número de preparatorianos ya parecía inmanejable. Pero al mismo tiempo, cierra oportunidades a miles de jóvenes que tenían en la UAS la única alternativa de estudio porque las otras instituciones que ofrecen el bachillerato en Sinaloa han parado su crecimiento. En realidad, al cierre del siglo, la UAS ha cargado sobre sus hombros la mayor responsabilidad de brindar estudios de bachillerato a los jóvenes sinaloenses, al grado de que en 1997, del total de la matrícula estudiantil de la universidad, el 45 por ciento correspondía a las preparatorias. De 99,800 estudiantes de bachillerato en el estado, 40,867 correspondían a la UAS.¹⁷

Los estudios de posgrado son la división en la que más rápida y sostenidamente ha crecido la UAS. Al igual que en muchas universidades estatales fue hasta mediados de la década de los ochenta del siglo XX que se iniciaron las maestrías y doctorados. En 1993, la UAS tenía 23 programas de posgrado, pero de ellos sólo uno era de doctorado. En 2000 ya contaba con 50, que incluían 18 especialidades, 23 maestrías y siete doctorados. Sin embargo, no todos estos estudios los impartía exclusivamente la UAS, sino que cinco maestrías y un doctorado se realizaban a través de convenios con otras institucio-

¹⁶“Diálogo con el rector” (s/f), entrevista de Melchor Inzunza Cervantes con Jorge Luis Guevara R., *Revista de la Universidad*, núm. 1, Culiacán, Sinaloa, p. 10.

¹⁷ Jorge Luis Guevara Reynaga, *Tercer Informe 1999-2000*, Culiacán, 2000, p. 22. y Sergio Aguiar Quezada, *El almanaque mexicano*, Proceso-Grijalbo, México, 2000, p. 365.

nes nacionales y extranjeras. La matrícula en el ciclo escolar 1999-2000 congregaba en la licenciatura 30,604 estudiantes y 663 alumnos en posgrado, distribuyéndose 225 alumnos en maestría, 27 alumnos en doctorado y 384 alumnos en especialidades.¹⁸

A pesar de que en un plazo aproximado de 10 años la UAS pasó de cero a 663 alumnos de posgrado, en comparación con universidades que tienen una matrícula global semejante, como la UANL, queda muy rezagada. Ésta tiene poco más de 100,000 estudiantes en todos sus niveles, incluyendo el bachillerato, pero tiene inscritos más de 3,000 en sus 52 especialidades, 59 maestrías y 21 doctorados, de los cuales están inscritos en el Padrón de Excelencia del Conacyt 16 maestrías y 15 doctorados. En la Universidad de Guadalajara, que tiene 165,075 estudiantes (101,238 de bachillerato, 51,460 de licenciatura) hay 4,315 estudiantes en 22 doctorados, 61 maestrías y especialidades. La Universidad Autónoma de Guanajuato con 21,189 estudiantes (9,474 de preparatoria y 8,934 de licenciatura) tiene inscritos 2,781 estudiantes extranjeros y de posgrado, de este último ofrece seis doctorados, 24 maestrías y 18 especialidades.

Las entidades con más estudiantes de posgrado, de las que no forma parte Sinaloa a pesar de contar con la cuarta universidad más grande del país, son: el D.F., con 30,500; Nuevo León, con 7,900; Estado de México, con 5,710; Puebla, con 5,300; y Jalisco, con 4,855. De los más de 30,000 estudiantes de posgrado del D.F., 17,896 pertenecen a la UNAM.¹⁹

De las cuatro universidades mexicanas con mayor número de estudiantes, UNAM, UG, UANL y UAS (sin incluir el IPN), la UAS es la que recibe menor financiamiento por alumno.²⁰ La UNAM percibe 22,990.4 pesos; la Universidad de Guadalajara, 9,174.7; la UANL, 10,378.9; y la UAS, 7,920.1. En este mismo marco de comparaciones, el rector Jorge Luis Guevara Reynaga, establece la siguiente: ”

...la UAS tiene una presencia grande, directa o indirectamente está relacionada con unas 750,000 personas en un estado de 2.4 millones de habitantes. La UNAM, por ejemplo, tiene 265,000 estudiantes, pero el D.F. cuenta con 20 millones de habitantes. El D.F. es ocho veces mayor que Sinaloa, la UNAM es tres veces mayor que la UAS; pero la presencia de la UAS en Sinaloa significa el triple que la de la UNAM en el D.F. Otro caso es el de la Universidad de Guadalajara con 150,000 estudiantes, también tiene bachillerato, como la UNAM; casi la mitad de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara están en bachillerato y 120,000 en la UNAM. También ahí se da la relación 1 a 3

¹⁸ *Ibidem*, p. 99.

¹⁹ ANUIES, *Anuario estadístico 1997 y La Jornada*, 19 de diciembre de 2000.

²⁰ *Ibidem*, p. 99.

con respecto a la UNAM. Pero Jalisco tiene más de ocho millones de habitantes; la presencia de la UAS en Sinaloa es mayor que la de la Universidad de Guadalajara en Jalisco".²¹

En realidad, en el Distrito Federal hay 8'591,309 habitantes y junto con la población del Estado de México, 13'083,359, en total: 21'674,668; sin embargo, no toda la población del Estado de México está conurbada al D.F. La zona metropolitana de la ciudad de México, poco más de 14 millones de habitantes, que incluye a los municipios adjuntos del Estado de México, los cuales constituyen el 52 por ciento del total, es cinco veces mayor que la de Guadalajara. Por otra parte, la población total de Jalisco es de 6'321,278 habitantes, la de Nuevo León es de 3'826,240, y la de Sinaloa de 2'543,835.²²

Al margen de estas precisiones, el rector Jorge Guevara Reynaga acierta al afirmar que, tomando como referencia la población total de cada región, comparativamente, la Universidad Autónoma de Sinaloa es el centro de estudios superiores más numeroso del país, y a su vez la que menor subsidio recibe por estudiante. No obstante este hecho, es evidente que otras universidades reciben un subsidio considerablemente mayor que la UAS porque destinan gran parte de sus recursos a la investigación científica y a los estudios de posgrado. Por lo menos en los casos de la UNAM, UANL, Universidad de Guadalajara y UAG, sus estadísticas así lo demuestran. La UNAM, por ejemplo, reclama que el 50 por ciento de la investigación científica mexicana se lleva a cabo en sus recintos; que representa más del 30 por ciento de los integrantes del Sistema Nacional de Investigadores; cuenta con 39 institutos y centros de investigación y tiene 3,779 investigadores y técnicos de tiempo completo.²³ La Universidad de Guadalajara tiene 1,123 investigadores, y la UANL tiene al 10 por ciento de su profesorado en los estudios de posgrado, de más de 5,000 profesores en el conjunto de la institución. La UAS, por su parte, en el escenario de la investigación científica y tecnológica del estado poseía el 59 por ciento de las escuelas, 40 por ciento de los centros, 55 por ciento de los proyectos y 61 por ciento de los investigadores. No obstante, de sus 2,936 plazas de tiempo completo, poco más de 300 eran de investigadores y de aproximadamente 1,200 académicos postgraduados, 79 por ciento no realizaban ninguna investigación.²⁴ Por otra parte, en 1998, de 6,742 miembros del Sistema Nacional de Investigadores, en la UAS había tan solo 21, y 29 en todo Sinaloa.²⁵

²¹ "Diálogo con el rector", p. 10.

²² Aguayo Quezada, *El almanaque mexicano, op. cit.*, p. 65.

²³ *La Jornada*, 19 de diciembre de 2000.

²⁴ *Tercer Informe*, p. 99.

²⁵ Aguayo Quezada, *El almanaque mexicano, op. cit.*, p. 101.

Aun sin conocer los criterios de la SEP para otorgar el financiamiento a las universidades públicas, resalta que las instituciones más beneficiadas son las establecidas en la ciudad de México, lo cual podría explicarse en parte por la inercia centralista del Estado mexicano, pero es también visible que en ellas es donde más se realiza la investigación científica. De ser cierta esta conjetura, entonces a la UAS se le entrega, en lo fundamental, financiamiento para la docencia, aunque hay estados como Tabasco y Campeche donde tan solo tienen un miembro en el Sistema Nacional de Investigadores, los cuales, incluso, podrían no ser miembros de sus universidades; sin embargo, reciben un financiamiento por alumno de 17,649.6 pesos, en el caso de Campeche, y de 8,181.4, en el caso de Tabasco.²⁶ Si los subsidios de la SEP a las universidades no se explican por la relación prioritaria que se establece entre financiamiento-enseñanza-investigación, entonces los criterios, muy probablemente, son políticos. Lo cual también nos llevaría también a conjeturar que la SEP sigue “castigando” a la UAS por considerar que nuestra institución aún no supera del todo la “degradación” académica de la que hablaba Jesús Reyes Heróles en el sexenio de Miguel de la Madrid. Otra conjetura, menos creíble, es que los rectores de la UAS no han tenido suficiente capacidad de negociación con las autoridades federales y estatales para obtener mayor subsidio.

Politicidad, rendimiento académico y autocrítica

Independientemente de cuáles sean los factores que expliquen el castigo financiero a la UAS y que éste incide en el desarrollo académico de la institución, existe el convencimiento, entre un cada vez mayor número de profesores e investigadores, de que las inercias de la vieja politicidad de la UDCP son una causa principal en su rezago.

Son observables, por supuesto, importantes pasos adelante en la normalización de la vida escolar de las preparatorias y licenciaturas de la UAS, sin los cuales no se explicarían los estimulantes éxitos en certámenes de competencia académica dentro y fuera del país, tales como los que menciona el rector Jorge Guevara Reynaga en su Tercer Informe, 1999-2000.²⁷ De la

²⁶ *Ibidem*, p. 99.

²⁷ Entre otros logros académicos se mencionan los siguientes: estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Culiacán ganaron, en 1999, por quinta vez, el primer lugar nacional en la Olimpiada Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, obteniendo ocho primeros lugares, cuatro segundos y cinco terceros. Dos estudiantes de la Escuela de Medicina obtuvieron el primer lugar en el área de epidemiología dentro del tercer Congreso Científico Mexicano de Estudiantes de Medicina, en abril de 1999. En el mismo año en el área de trabajo social, dos estudiantes lograron el primero y segundo lugares nacionales, por la mejor exposición en el servicio social, premio convocado por Causa Joven. En el séptimo Congreso de Experimentos y Aparatos de Física 1999, ganaron estudiantes de preparatorias de la UAS en Culiacán. En la X Olimpiada Nacional de Física 1999, lograron primeros lugares estatales estudiantes de la Preparatoria Guamúchil y Prepa Guasave Diurna. En la XII Olimpiada Nacional de Matemáticas, obtuvieron primeros lugares tres estudiantes de la Preparatoria Guamúchil y de la Salvador Allende, en Culiacán. *Tercer Informe*, pp. 30-31.

misma manera, se podría ver como un avance el que cuatro doctores más de la UAS hayan sido aceptados al Sistema Nacional de Investigadores en 2000, sumándose a los 22 miembros de 1998, etcétera. Sin embargo, sólo una visión académica conformista llevaría a aceptar que esos avances son la prueba definitiva de que la UAS se encuentra ya dentro de una actividad académica de alto rendimiento. Más bien, si tomamos otros indicadores podríamos afirmar que la UAS todavía no arriba a una simple normalidad académica. Los siguientes son los argumentos de tal aseveración.

Sin tener estadísticas a la mano de la pérdida de clases en las diferentes escuelas y zonas de la UAS, ya sea por causa de la inasistencia de los estudiantes, profesores o paralización de actividades por motivos sindicales y/o políticos, campañas electorales, celebraciones estudiantiles, etcétera, es considerablemente alta, particularmente en la zona sur. La simple lectura de la prensa diaria nos revelaría la inconsistencia de la vida escolar de la institución.

La revisión de las estadísticas oficiales que da la rectoría para los niveles de bachillerato y licenciatura revela otros indicadores de la irregularidad de la vida académica. Hacer la comparación con universidades de otros estados indicarían con mayor fidelidad cuál es el nivel de eficiencia terminal de nuestra universidad, pero aun sin hacerla no es arriesgado afirmar que, en promedio, es baja:

- a) A nivel de bachillerato, en la zona norte, es de 72.41 por ciento. En la centro-norte, de 67.87 por ciento. En la centro, es 59.08 por ciento. En la sur, es 54.35 por ciento. El promedio estatal es 61.90 por ciento.
- b) En los estudios subprofesionales la zona norte entrega cifras de 80.84 por ciento. Centro, 62.73 por ciento. Sur, 55.70 por ciento.
- c) A nivel de licenciatura la eficiencia terminal en la zona norte es de 42.43 por ciento. Centro norte, 53.78 por ciento. Centro, 56.20 por ciento. Sur, 50.24 por ciento. Promedio, 52.91 por ciento.
- d) En los estudios de maestría el cociente ingreso/egreso, dice el informe oficial de 1999-2000, es del 84 por ciento, con una eficiencia terminal promedio en alumnos graduados del 35 por ciento, cifra aceptable en los estándares de la UAS.
- e) En el doctorado en Ciencias Sociales, el primero en la historia de la UAS, a mediados de 2000, el porcentaje de graduados de la primera generación era de 80 por ciento.

En comparación con el Tecnológico de Monterrey, en Mazatlán la eficiencia terminal de la UAS es muy baja, porque en la primera más del 90 por ciento de sus estudiantes de bachillerato y licenciatura se gradúan.

En términos objetivos, los indicadores más precisos para medir los progresos académicos de la UAS no serían los éxitos individuales de sus estudiantes

en concursos estatales, nacionales e internacionales, sino el porcentaje de graduados entre sus alumnos y la calidad de su aprendizaje. La eficiencia terminal, como ya lo apuntamos, es baja en las escuelas de la UAS. Ante la ausencia de instrumentos de medición objetiva, la calidad de la enseñanza sólo se puede medir a partir de la observación de la experiencia como estudiantes y profesores de la institución; en este caso, los foros de análisis y los encuentros informales permiten concluir que la calidad es deficiente.

Debido a los limitados alcances de este trabajo, no es posible ofrecer una información que refleje ampliamente la opinión que tienen los profesores y estudiantes acerca de la calidad de la educación en la UAS; no obstante, aquí se presenta el caso de la Escuela de Ciencias Sociales-Mazatlán, no como un ejemplo del cual se desprendan verdades e hipótesis del universo, pero sí al menos como una muestra ilustrativa de lo que acontece en la tercera escuela más poblada de la zona sur.

En el rubro de la eficiencia terminal, una investigación realizada en 1997 por la estudiante Guadalupe Sánchez Chiquete, de la carrera de ciencias de la comunicación,²⁸ agrega un matiz a las estadísticas oficiales que presentan las autoridades de la universidad. Al menos en la Escuela de Ciencias Sociales, se establece una diferencia clara entre egresados y titulados:

De los alumnos inscritos en los dos turnos del ciclo 1992-1997 de la carrera mencionada, sólo egresaron 115, dando una totalidad del 51.27 por ciento de los desertores. Del 48.72 por ciento que egresó, algunos estudiantes adeudan materias por lo que no recibieron su certificado. Es una estadística preocupante para la comunidad universitaria, ya que la Carrera de Ciencias de la Comunicación no es la única que tiene estos índices de deserción.

Esta misma alumna hace un balance muy crítico de sus estudios de licenciatura:

Como estudiante de la UAS me he dado cuenta de las fallas internas que se originan en la Escuela de Ciencias Sociales, específicamente en la Carrera de Ciencias de la Comunicación.

Faltan talleres en donde se nos enseñe a redactar, ortografía y sobre todo a enfrentarnos con lo que va a ser nuestra área laboral.

El plan de estudios necesita ser renovado para incluir materias nuevas, como pueden ser: inglés, publicidad con computación, mercadotecnia, etcétera.

²⁸ Guadalupe Sánchez Chiquete, *Deserción escolar en la licenciatura de Ciencias de la Comunicación. Memoria para obtener el título de licenciada en Ciencias de la Comunicación*, Escuela de Ciencias Sociales, Mazatlán, 1997, pp. 38-41.

Es importante que realicemos prácticas profesionales donde aprendamos a ejercer nuestra profesión, sin embargo, no se realizan. Así obtendríamos experiencia, y nos sería menos difícil encontrar un empleo.

En el servicio social nos asignan a lugares que no tienen nada que ver con nuestra carrera.

Algunos profesores asumen actitudes de sabelotodo y en lugar de prepararnos se dedican a criticarnos, y no se preocupan por darse a entender en sus materias.

También algunos profesores asisten ebrios a impartir sus materias, siendo esto una falta de respeto a los alumnos y a la escuela.

Falta motivación de profesores para mejorar los elementos que propicien el aprendizaje

Existe un alto índice de rutina. Los profesores tienden a repetir algo que en muchos casos ni ellos mismos han asimilado.

Incursionando en otra variable que nos ayude a entender la calidad de la educación en la Escuela de Ciencias Sociales, la investigación que sobre hábitos de lectura realizaron las estudiantes Romero Oropeza, Valdez López y Carrillo García,²⁹ arroja más información. Su conclusión más contundente es que: “La ausencia de hábitos de lectura ha sido una constante en las Escuelas de la Universidad Autónoma de Sinaloa; y por supuesto, la Escuela de Ciencias Sociales de Mazatlán no es la excepción.”

Estos estudiantes concluyen correctamente que la ausencia de hábitos de lectura responde a fenómenos estructurales de la educación mexicana. Las políticas educativas del gobierno federal, sostienen ellos, siguen fracasando en sus intentos por incentivar la lectura en las escuelas primarias. “Si los propios profesores de este nivel educativo no gustan leer ¿Cómo inculcar en sus pupilos este hábito? Además, argumentan, los medios de comunicación electrónicos han conformado una cultura diametralmente opuesta a la cultura letrada.”

Otra tesis de licenciatura en Ciencias de la Comunicación, revela con datos muy concretos, los hábitos de lectura de la prensa diaria de los estudiantes de Ciencias Sociales.³⁰ En la investigación se aplicó una encuesta al 10 por ciento (149 alumnos) de los estudiantes de las cuatro carreras de Ciencias Sociales (sociología, economía, ciencias de la comunicación y comercio inter-

²⁹ Ruth Verónica Romero Oropeza, Patricia Valdez López, Dalila Carrillo García, *¿Qué leen los estudiantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación?*, Escuela de Ciencias Sociales, Mazatlán, 1997, pp. 32-61.

³⁰ Helios Arturo Garay Domínguez, María Concepción Moreno González y José Guadalupe Tirado Maldonado, *Hábitos de la lectura de periódicos en la Escuela de Ciencias Sociales*, tesis de licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Escuela de Ciencias Sociales, Mazatlán, 1996.

nacional); estos estudiantes declararon que leen los periódicos sólo algunos días; 18.1 por ciento de los entrevistados dijeron leerlos accidentalmente, 40.9 por ciento los leen una o dos veces por semana, y un reducido conjunto del 8 por ciento respondió que los lee entre cuatro y seis días por semana.

Los profesores de la Escuela de Ciencias Sociales entrevistados por los estudiantes que realizaron la investigación sobre los hábitos de lectura de los alumnos respondieron de manera coincidente a la siguiente pregunta:

¿Cómo considera usted el nivel educativo de los estudiantes de comunicación?

Profesor Nery Córdova:

El nivel educativo comparado, digamos, con otros centros educativos es muy bajo (pero) el problema no es de los estudiantes, el problema es de fondo, que tiene que ver con la estructura de la enseñanza a nivel nacional.

Profesor Ruy Alfonso Franco:

Me parece que desgraciadamente es pobre en términos generales. Y no creo que sea un problema exclusivo de esta universidad, sino que a nivel nacional hay una gran pobreza cultural en todas las escuelas aunque en unas es más evidente que en otras. Lo que sorprende, y acaso sería lo criticable, es que en escuelas como la nuestra, en la que todas las carreras tienen que ver con la cultura, justo exista tanta pobreza cultural.

Profesor Segundo Galicia:

En una consideración bastante general es bastante heterogéneo, pero también podríamos indicar que, en general, es bastante bajo. Por otra parte, el estudiante en general muestra muchas deficiencias a su egreso (...) Como buenos miembros de la sociedad mazatleca, estos jóvenes tienen muy poca dedicación a la lectura y, lamentablemente, en nuestra condición de universitarios no se insiste mucho en probar condiciones para la lectura. Esto lo digo porque, en general, en toda la universidad, particularmente en la zona sur, los estudiantes estudian más con apuntes que con los libros, y esto de por sí, ya es una deficiencia muy grave.

Profesora Guillermina Vázquez Dueñas:

Bajo. Creo que les falta mucho en cuanto a hábito de estudiar, de obtener información. Creo que es muy, muy limitado salvo algunos casos excepcionales.

Hablemos de la secundaria o preparatoria, no hay interés de algunos maestros de fomentar el hábito de la lectura, el estudio o la recolección de información sobre todo de las fuentes bibliográficas. Entonces, si no se inculca el hábito en la primaria, secundaria, preparatoria, entonces cuando llegan a la universidad cuesta mucho trabajo seguir ese hábito. Yo creo que por eso se da la deserción en carreras como la nuestra que implica mucha lectura.

Profesor José María Adame:

...el alumno no lee porque, en primer lugar, todo tiene que ver con los hábitos que se adquieren en la casa (...) Nosotros somos responsables también de eso porque somos maestros muy malos en general. Encontramos una situación donde nos cansamos de exigir. Yo tengo 17 años de estar aquí, 17 años de estar intentando cambiar los malos hábitos, de mejorar la calidad del alumno como tal, pero todo se vuelve una cantaleta y, cuando me doy cuenta, digo ya, como sea porque de cualquier manera no me entienden (...) Al principio –dije– yo hacía puros exámenes orales, pero ¿qué pasó?, si reprobaban conmigo iban con otro maestro y la pasaban muy bien; entonces, yo llegué a la conclusión de ponerles un seis y no reprobarlos y no recurrieran al extraordinario y lo pasaran con 10. Así, poco a poco, a medida que nos cansamos nos vamos haciendo maestros malos.

Ésta es la opinión sumamente crítica de tan solo cuatro maestros entrevistados, de una sola escuela, y de una sola zona de la institución; no obstante, puede afirmarse sin gran margen de error que ésta es la opinión generalizada de los maestros de la Escuela de Ciencias Sociales. Ahora bien, sin que pueda extenderse de manera automática esta misma interpretación a otras escuelas de la UAS, si tomamos como un indicador los pobres hábitos de lectura de los estudiantes y la mayoría de los profesores de la UAS en Mazatlán, podemos arriesgar la hipótesis, tan solo por este hecho, de que la educación que impartimos es deficiente por lo menos en el conjunto de la zona sur. Testimonios de propietarios y empleados de las pocas librerías del puerto atestiguan la raquítica compra de libros por parte de los universitarios. Las estadísticas de la librería *Aquamar*, cuyo propietario es profesor de la Escuela de Ciencias Sociales, reflejan que los estudiantes y maestros que más adquieren libros en el puerto son los de la misma escuela de Ciencias Sociales, y éstos, tal y como lo describen las tesis mencionadas, son una minoría.

Así como lo señalan los profesores citados, y como se inicia este texto, es importante enfatizar que la deficiente calidad de la enseñanza en la UAS es parte de la crisis nacional de la educación mexicana. Es imposible que pueda haber una educación de excelencia en las instituciones de nivel superior cuando la educación básica es sumamente deficiente. En realidad, el fortalecimiento de la educación pública mexicana sólo podrá lograrse a mediano o largo plazo reformando estructuralmente todos los niveles educativos. Por lo pronto, lo urgente y elemental es hacer una reflexión crítica de lo que tenemos e iniciar el desmantelamiento progresivo de los obstáculos más visibles para una buena educación.

No obstante, los rasgos dominantes de la propuesta educativa de la nueva clase gobernante, que enfatizan aún más que los neoliberales priístas la

filosofía empresarial en el seno de la educación pública, significa un enorme reto multidimensional: político, ideológico y teórico conceptual. Las universidades públicas tenemos que ser eficientes sin imitar la eficiencia empresarial que prioriza el mercado y la ganancia. Tenemos que formar estudiantes con una conducta de máxima superación sin imitar la competencia individualista. Tenemos que educar estudiantes capaces de obtener un buen empleo sin que se desatiendan de las necesidades sociales existentes más allá de las pautas que marca el mercado. Tenemos que ser disciplinados en el estudio y la investigación sin caer en el acriticismo y la obediencia incondicional. Tenemos que planificar y tener una visión de futuro sin renunciar a nuestras mejores tradiciones intelectuales y sociales. Tenemos que incorporar las tecnologías de punta sin abdicar ante el tecnocratismo. Tenemos que alcanzar los más altos rendimientos académicos sin perder el compromiso social y rendir la universidad pública a las necesidades exclusivas de la empresa.

Tomando como un espejo a nuestra historia independiente, no podemos seguir actuando como en el pasado, en el que imitábamos extralógicamente modelos educativos foráneos. En los años más recientes, para las autoridades del país el modelo ha sido la universidad estadounidense. Una de las características más visibles de la vecina sociedad ha sido su obsesión por el futuro, y en contraste, tiene amnesia por el pasado. México, en el polo opuesto, si algo la ha caracterizado es su enamoramiento por la tradición, y su casi nula previsión del futuro. La sociedad estadounidense revela mejor que ninguna otra nación el espíritu de la modernidad que es, en palabras simples, la desesperación por lo novedoso, las ansias de cambio constante, el frenesí por los descubrimientos. México, en cambio, con un alma profundamente barroca, aletarga los cambios, respira larga y accidentadamente antes de pensar y concretar un cambio.

Los estadounidenses se adelantan a todo; planean a muy largo plazo y van sistemáticamente concretando sus objetivos. Por ejemplo, la universidad del siglo XXI la tienen imaginada, y construida virtualmente desde hace varios años. Y la han ido levantando poco a poco, destruyendo la universidad moderna que forjaron entre los siglos XVII y XX. De alguna manera la universidad estadounidense del siglo XXI es la universidad posmoderna, la cual desde ahora mismo ya reduce rigurosamente la matrícula estudiantil, disminuye las carreras del área de humanidades, artes y ciencias sociales, recorta recursos para el nivel de licenciatura, endurece los requisitos para ingresar al doctorado y al posdoctorado y los especializa aún más, además de que los “desideologiza” y los tecnifica. Todas estas políticas académicas se dan en el

marco de la globalización de los intereses estadounidenses, dentro de los cuales su matrícula académica a nivel de los posgrados capta a muchos de los mejores estudiantes y profesores-investigadores del mundo. Las universidades de Estados Unidos, coptando a los mejores talentos del planeta, se preparan para reforzar la hegemonía de su país en el siglo XXI.

En México, los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo intentaron imitar al modelo universitario estadounidense, que ahora parece impulsar también Vicente Fox. Cuando hablan de la “excelencia académica” los tres últimos gobernantes mexicanos se refieren a la filosofía educativa eficientista y mercantil. Pero en México, estas propuestas encuentran una resistencia granítica porque nuestra realidad es otra. Nuestra cultura y nuestras necesidades son otras. Solamente pensando en México, aun dentro de la globalización, e inmersos en nuestras propias experiencias y necesidades podemos proponer y construir la universidad del siglo XXI. Sin embargo, mientras que en Estados Unidos se pretende construir una universidad asépticamente apolítica, de aparente pureza ideológica, y sólo al servicio de las demandas del mercado y del Estado gerencial, en México, universidades como la UAS se sobrepolitizan sobre sí mismas, perdiendo la brújula de la actividad académica y de las necesidades sociales que las rodean.

Una de las características que justamente debería tener la universidad pública mexicana del siglo XXI, es la de preparar sujetos socialmente responsables. La universidad mexicana del nuevo siglo debe contribuir como pocas instituciones a formar ciudadanos plenos, preocupados por la comunidad en la que vive. Pero para eso se necesita una preparación académica y ética mucho más sólida que la que hoy tenemos. Cuando en una universidad la actividad política doméstica se convierte en un fin en sí mismo, utilizable para escalar posiciones dentro de su estructura burocrática, se pervierten sus actividades sustanciales y deforma cívicamente a sus estudiantes.

La institucionalidad política e inestabilidad académica

Bajo el régimen político tradicional, las universidades públicas mexicanas eran regidas casi sin excepción por militantes del partido oficial, a pesar de que en su mayoría habían obtenido el estatus jurídico autonómico entre 1929 y la década de los setenta. Esta condición era prácticamente otra de las reglas no escritas del viejo régimen. Aun y cuando las leyes orgánicas de las universidades autónomas establecen que serán exclusivamente sus instancias de gobierno las que decidan quiénes serán sus autoridades, en realidad el poder ejecutivo federal o estatal imponen el nombramiento del rector.

Tanto en las universidades gobernadas por la izquierda como las gobernadas por el PRI, sus instancias universitarias de gobierno y decisión no elegían a individuos independientes en el plano partidario ni, por lo general, con una experimentada y profunda vocación académica. Esta ecuación: política partidaria-rectoría universitaria sin duda ha dificultado el desarrollo académico de las universidades públicas mexicanas. Aun habiendo excepciones notables, la enseñanza, la cultura y la ciencia se han visto obstaculizadas por la acción partidaria y la politización de sus criterios de regencia universitaria.

La Universidad Autónoma de Sinaloa no ha podido superar los criterios y mecanismos político-partidarios para elegir a sus autoridades; esta situación se hace más aguda cuando está presente la injerencia del gobernador, como ocurrió en el proceso sucesorio del 2001. Si de por sí ha sido perjudicial que los diferentes grupos políticos se disputen el control de la universidad, es todavía más dañino que intervenga el ejecutivo estatal porque hace intervenir intereses políticos todavía más poderosos y extrauniversitarios.

En este sentido, a las dificultades inherentes a la baja calidad académica de la universidad se suma un clima perturbador cada cuatro años cuando se tiene que elegir al rector de la UAS. Cabe señalar que aunque no con los mismos moldes, ni con la misma agitación e inestabilidad, este proceso ocurre en prácticamente todas las universidades del país; la elección del rector es el momento cíclicamente climático en cada una de ellas.

En las universidades de los países desarrollados particularmente en Estados Unidos, la elección de sus autoridades es menos agitada porque los rectores no son figuras políticas como en México. En la tierra del águila y la serpiente la disputa de la rectoría es intensa, y a veces encarnizada, porque los rectores gozan de un poder político inmenso que, de manera semejante al debilitado sistema político priísta, no tiene reglas escritas. Con mucho, el sistema de organización y poder de la universidad pública mexicana es una reproducción, virtudes más virtudes, menos, del viejo sistema político mexicano: centralista, patrimonialista, corporativo y débilmente institucional. Y al igual que en la política nacional mexicana, en las universidades públicas el eje de su funcionamiento es el "presidente"; es decir, el rector.

En México, los rectores son figuras públicas, líderes de opinión y con frecuencia políticos fuera del ámbito universitario. No en pocos casos, la universidad pública mexicana ha servido como plataforma de lanzamiento de rectores que se han convertido en diputados, senadores, gobernadores,

secretarios de Estado, presidentes municipales, etcétera. La universidad mexicana del siglo xx ha sido una verdadera escuela de políticos profesionales. En realidad, con pocas excepciones y más en el pasado, la universidad mexicana ha sido dirigida por individuos que tienen más vocación política que científica o humanista. ¿Será esta tradición uno de los impedimentos para que la universidad mexicana no haya logrado las alturas que pudiera tener?

La Universidad Autónoma de Sinaloa, aun con los notables cambios que ha experimentado en los últimos cuatro años, dentro de los cuales está haber reducido la intensidad de sus periodos de perturbación en la disputa por la rectoría, no ha podido superar la vía del poder político como principal criterio para elegir a sus autoridades administrativas. Cuando esto es así, la propaganda ideológica es el medio de promoción académica y no el juicio crítico. Como la dinámica política arrolla cualquier otro factor, es imposible que se tomen en cuenta los atributos académicos de otros universitarios.

Aunque en menor grado que en el pasado, la UAS sigue respirando aires corporativos y partidarios. En la universidad, la mayoría de sus académicos, empleados administrativos y autoridades toman decisiones en bloque porque se presiona para actuar con espíritu corporativo y no individual.

Este tipo de mecanismo político electoral no ha inhibido del todo el desarrollo y consolidación de algunos programas académicos, sobre todo de posgrado; sin embargo, no es difícil darse cuenta que si en la universidad se seleccionaran a sus mejores hombres y mujeres para dirigirla, con estrictos criterios de política académica no por la competencia de grupos de presión política, sería razonable esperar una riqueza intelectual mayor.

Sin duda alguna, a pesar de todo, la UAS tiene grandes avances en la producción científica, cultural y académica del estado; remover la politicidad errónea significará un desafío central para multiplicar en cantidad y calidad las enormes potencialidades académicas, científicas, culturales y sociales que aguardan en Sinaloa.

Epílogo.

A mediados de mayo de 2001 la Universidad Autónoma de Sinaloa eligió al ingeniero Gómez Monárrez como rector de la más antigua institución de educación superior del noroeste mexicano. Gómez Monárrez se impuso al maestro Aarón Quintero y al doctor Rafael Valdez Aguilar en una larga, costosa y agresiva contienda electoral.

Hay prácticamente un consenso en los medios periodísticos, políticos, sociales, empresariales y académicos del estado de que esta última disputa por la rectoría de la UAS ha sido la más cara y conflictiva de las dos últimas décadas.

A lo largo de este ensayo se ha analizado el origen y características del método para elegir autoridades en la Universidad Autónoma de Sinaloa, el cual, a mi juicio y balance, ha provocado un daño de inconmensurables dimensiones a las actividades sustantivas de una institución académica.

La herencia política de la Universidad Crítica Democrática y Popular (UCDP) sigue gravitando centralmente en la elección de todo tipo de autoridades, pero sobre todo en la elección del rector.

La preeminencia absoluta de los criterios político electorales para escoger al rector en la UAS, ha implicado que los bandos que contienden cada cuatro años recurran tanto a la imitación de la cultura política extrauniversitaria que más se presta a la ausencia de sólidos marcos legales como a la adopción de las técnicas publicísticas electorales más en boga.

Una justificación estelar de los defensores del método político electoral para elegir autoridades en la UAS ha sido la de sostener que, desde sus inicios, se buscó fomentar una cultura democrática entre los universitarios que no existía en el resto de la sociedad mexicana; es decir, un objetivo de primer orden en la izquierda universitaria que propuso e instauró el procedimiento electoral en la UAS era el de contribuir a la democratización de las prácticas políticas de la sociedad y el Estado mexicanos. Y, ciertamente, en la Universidad Autónoma de Sinaloa se implantó la competencia política y electoral pero con un orden legal muy endeble y poco respetado en muchas de sus normas. En muchos sentidos, y a pesar de que en la UAS se empezó a generar una intensa y abierta disputa electoral, no se dejaron de imitar las prácticas políticas más socorridas por el PRI a lo largo y ancho del país, tales como el corporativismo, el clientelismo, el acarreo e, incluso, el fraude. Pero, mientras que en el sistema electoral mexicano han disminuido sustancialmente todos esos usos políticos debido a la ciudadanía del Instituto Federal Electoral y la mayor vigilancia y acción de la sociedad civil, en la UAS los usos políticos irregulares continúan porque no hay organismos confiables que organicen las contiendas electorales. Es decir, incluso en el terreno político comicial, la UAS ha quedado notablemente rezagada en relación con los avances recientes de los partidos, el Estado y la sociedad civil. La izquierda universitaria al implantar el método electoral intentó contribuir a la democratización del país en un contexto histórico donde aquello parecía justificable; pero

después del 6 de julio del 2000 los usos políticos de los grupos dirigentes de la UAS son más bien un ejemplo de lo anacrónico.

En la elección de rector celebrada el 16 y 17 de mayo de 2001, no se respetó prácticamente ninguna de las normas establecidas en los estatutos universitarios. Salvo el cumplimiento a las fechas establecidas para votar, todos los reglamentos fueron violados: empezando porque uno de los candidatos a rector, el maestro Aarón Quintero Pérez, no cumplía con todos los requisitos para serlo; el financiamiento para las campañas no tuvo tope ni control alguno, lo cual favoreció un gasto desmedido en sus actividades; la Comisión al Mérito Académico fue rebasada, agredida y muchas veces ignorada por los partidos del ingeniero Monárrez González y del maestro Aarón Quintero; el rector José Luis Reynaga fue el principal apoyo político, y según muchas versiones dentro y fuera de la universidad, también un importante sostén financiero del candidato ganador Gómez Monárrez, es decir, no hubo neutralidad institucional en el proceso electoral; no se respetaron las restricciones a la propaganda, etcétera.

Aunado a todas estas irregularidades, en la última campaña se utilizó masivamente la publicidad electrónica en la televisión y la radio a manera semejante de lo que sucedió en las pasadas elecciones presidenciales del año 2000, incluyendo la guerra sucia, donde se denigra a los contendientes y se utiliza la vida privada como objetivo de crítica política. Todo esto sin abandonar los acarreos, las gigantescas concentraciones de estudiantes con gastos pagados de traslado y alimentación, el uso de ídolos del deporte y la música para apoyar los actos masivos y la propaganda en radio, televisión y prensa escrita.

Por cuanto que los estudiantes son la fuerza electoral decisiva, ya que superan varias veces el número de profesores, investigadores, personal administrativo y de intendencia de la universidad, la propaganda se dirigió principalmente a ellos, y los profesores y funcionarios de la administración central y del sindicato fueron los principales operadores políticos de los candidatos Gómez Monárrez y Aarón Quintero.

En esta contienda también participó el doctor Rafael Valdez Aguilar, el único de los tres candidatos con una amplia y reconocida trayectoria académica y científica dentro y fuera del estado, con la notable diferencia de que el destacado médico e historiador no realizó una campaña política, ni gastó cantidades de dinero prohibidas, ni se apoyó en un grupo político sino que expuso sus ideas sobre el quehacer intelectual y científico en una universidad. En el contexto actual del sistema de elección de la UAS, un candidato

con las características y acciones del doctor Valdez Aguilar no tiene ninguna posibilidad de llegar a la rectoría si carece de partido político universitario y una cultura política indiferente a la legalidad.

La reciente disputa por la rectoría confirmó que la primera fuente de inestabilidad en la Universidad Autónoma de Sinaloa reside en los mismos mecanismos institucionalizados para elegir autoridades. Es decir, con el procedimiento político electoral está garantizada la inestabilidad institucionalizada en la UAS. El conflicto será permanente mientras impere en la institución un criterio político para elegir autoridades.

Aun conteniendo los más brillantes universitarios, con una larga trayectoria académica y llenos de reconocimientos, mientras prime la lucha política institucionalizada no habrá posibilidad de evitar la inestabilidad, el conflicto e incluso, sobre todo con el uso de la propaganda electrónica, del espectáculo frívolo. El problema es más institucional que de individuos.

El daño a la universidad que traen consigo las fraticidas contiendas electorales no termina cuando se levantan las campañas sino que se reproduce de diferentes maneras cuando continúan las negociaciones para formar el equipo administrativo del rector. Esto es así porque los mecanismos de toma de decisiones y las relaciones sociales en la UAS se erigen bajo la égida de criterios de campaña. De esta manera, los méritos en el activismo electoral son los que determinan en primera instancia quiénes asumen los mandos administrativos en la universidad. Los activistas de las campañas y grupos políticos aliados en el partido vencedor no permiten que individuos extraños a ellos les disputen los puestos de la administración central. Son excepcionales los casos en los que un universitario, quien no hace méritos políticos, al menos abiertamente, sea seleccionado para un cargo de responsabilidad oficial.

El 8 de junio asume el ingeniero Gómez Monárrez la rectoría de la UAS en medio de severas críticas de diferentes sectores de la sociedad sinaloense, con la excepción del gobierno del estado, lo cual podría confirmar la conjetura, sustentada también por otras evidencias, de que el gobernador de Sinaloa estuvo fuertemente involucrado, como en los mejores tiempos del partido de Estado, tanto con uno como otro candidato a rector.

No obstante las numerosas críticas, en la Universidad Autónoma de Sinaloa no hay un movimiento estudiantil o académico que pretenda transformar las estructuras dominantes de la institución. No hay una fuerza capaz de transformar la errónea politicidad de los grupos dominantes de la institución. El grupo triunfador promete una reforma universitaria que ponga un

límite a los excesos que año con año crecen en los enfrentamientos para elegir rector, pero pocas veces se ha visto en la historia una clase política que se autoinmole, por lo que los cambios serán con toda seguridad cosméticos. Y en la UAS quien dirige es una verdadera clase política, no una burocracia administrativa. En estas condiciones las enormes potencialidades que alberga la universidad en sus estudiantes y un amplio número de profesores e investigadores sólo se seguirán manifestando de manera irregular e insuficiente para las necesidades de la población del estado y la región noroeste del país.

